

## Capítulo II

### CLASIFICACIONES

**11. Advertencia.** Desde los tiempos del Derecho romano el Derecho de los bienes ha sido objeto de una intensa sistematización, que tiene como uno de sus puntos de partida su agrupación en distintas clases, en base a diferentes criterios.

Con el transcurso del tiempo algunas de esas clasificaciones pierden importancia, en tanto que aparecen otras, debido a la influencia de distintos factores. Serán consignadas las de mayor interés, no siempre formuladas directamente por el Código.

#### 1) BIENES CORPORALES E INCORPORALES

**12. Conceptos.** El CC. establece esta clasificación: “Los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales.

*Corporales* son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro.

*Incorporeales* las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas” (art. 565).

Para completar el cuadro positivo deben agregarse de inmediato los arts. 576: “Las cosas incorporeales son derechos reales o personales”, y 583: “Sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo”.

Después de permanecer mucho tiempo en la ley, esos textos han llegado a ganar consagración constitucional (C. Pol., art. 19 N° 24).

**13.** Estos preceptos consagran lo que la doctrina suele denominar “cosificación de los derechos”, decisión por la cual se considera cosas a los derechos; al ser considerados objeto de propiedad, se termina –como también se ha dicho– en su “propietarización”.

La clasificación fue formulada ya en el Derecho romano y mantuvo presencia durante toda la época medieval; pero se debilitó ostensiblemente en las codificaciones europeas (el CC. francés la omitió), aunque fue acogida en algunas hispanoamericanas.

La doctrina extranjera actual la considera, pero sin gran preocupación (y, por cierto, ha sido impugnada). Tal vez la principal objeción se refiere a que las cosas corporales son el objeto de los derechos (en una relación vertical) y entonces no es procedente pretender luego que éstos a su vez son cosas, junto a los primeros (en una relación horizontal), con lo cual, además, se posibilita la situación de derechos sobre derechos; en el mismo sentido, constituyendo dos categorías tan diferentes, no se trata de una clasificación, sino más bien de una arbitraria agrupación. Se ha reconocido aquella dificultad lógica pero, con base en la dilatada tradición, se destaca su utilidad en el tráfico jurídico, en el que con frecuencia se observa a los derechos funcionando como objetos de derechos (de lo que la cesión de créditos es un notorio ejemplo).

Así, aparte del chileno, parece difícil encontrar un ordenamiento en el que haya logrado tan destacada importancia.

Conforme al texto, las cosas incorporeales son los derechos. Es claro entonces

que donde no hay derecho no hay cosa incorporal. Pero aquí (como en el concepto de “bien”) vuelve a surgir la interrogante de la patrimonialidad; es que todos los derechos son cosas incorporales, incluso los extrapatrimoniales (como los llamados “derechos de la persona”) o sólo los patrimoniales. En el sistema del Código, una alternativa es concluir que sólo lo son los patrimoniales; esta postura puede ser sostenida si en el concepto de “bien” ya se exige la patrimonialidad, puesto que el texto dispone que son los bienes los que contienen las cosas corporales e incorporales; en el mismo sentido puede añadirse que más adelante (en el art. 576) se dispone que se dividen en reales y personales, y son los patrimoniales los que son así clasificados. Pero también se ha sostenido que son cosas incorporales, haciendo prevalecer el concepto que el Código tiene de las cosas incorporales; aunque no son bienes, son “derechos” y, por tanto, son cosas incorporales (todo lo cual tiene importancia para la posterior aplicación del art. 576, conforme al cual sobre las cosas incorporales hay una “especie” de propiedad).

Por su parte, cuando el texto constitucional asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales, presenta problemas semejantes (qué es bien y qué es bien incorporal); como la Constitución tiene sus propios elementos de interpretación, lo antes dicho queda para ella como una alternativa de comprensión.

**14. Aplicación.** La aplicación práctica de estos textos presenta en Chile una evolución notable.

Durante mucho tiempo fue escasamente aplicado. Pero desde fines de la década de los 60 del siglo recién pasado ha ido en constante incremento, tanto en el número de casos a los que se trata de aplicar, como en la naturaleza de los derechos a los que se intenta extender.

En esa época se inició su empleo frecuente en la materia de vigencia de la ley en el tiempo (retroactividad), respecto a

la legislación de arrendamiento rústico. Se dictó un cuerpo legal que extendió la duración mínima de esos arriendos (a un plazo mínimo de diez años, cualquiera hubiera sido el plazo inferior pactado) y en sus disposiciones transitorias se ordenó aplicable incluso a los contratos en actual vigencia. Entonces, arrendadores afectados sostuvieron que aquellas normas los privaban del “derecho” a pedir la restitución de sus inmuebles, lo que equivalía a privarlos de una “cosa” de su dominio (con cita de los tres preceptos antes transcritos: 565, 576 y 583) y que esa ley no reunía los requisitos de una ley expropiatoria; en estas circunstancias, esa norma legal era inaplicable por inconstitucional. Los tribunales acogieron el planteamiento.

Desde entonces, su aplicación ha ido aumentando incesantemente, el que se ha visto favorecido porque a aquella consagración legal en los tres preceptos anotados se han agregado dos textos concurrentes de la Constitución: a) el art. 19 N° 24 que, junto con proclamar la protección de la propiedad, consagra la propiedad sobre los derechos (sobre “toda clase de bienes, corporales e incorporales”); b) el art. 20, que establece –como se sabe– el llamado recurso de protección, para proteger concretamente diversos derechos constitucionales, entre ellos el de propiedad.

Una observación de los casos en que se ha aplicado permite concluir que la anudación de estas dos decisiones: que los derechos son cosas y que sobre estas cosas (incorporales) hay también una especie de propiedad (sin mayor atención a la prevención de que se trata de una “especie” de propiedad), ha orientado su aplicación en el sentido de conferir protección a la generalidad de los derechos de los particulares (y aun más allá, como lo diremos), lo que se traduce, por cierto, en un intenso fortalecimiento de ellos.

Esta protección se ha configurado, entre otros, en dos importantes campos, cada uno con su propia vía:

a) En la protección de derechos ante agresiones legislativas, que se cometen a

través de la retroactividad. Si una ley dispone que ella se aplicará incluso a situaciones ya producidas (por ej., una nueva ley de arrendamiento, que se dispone aplicable incluso a los contratos en actual ejecución), y se detecta que vulnera un derecho de un particular (arrendador o arrendatario), ya adquirido, se acude a aquel razonamiento, se propone que esa ley priva de la propiedad de ese derecho y que, por tanto, es una ley expropiatoria que, por no reunir los requisitos que la Constitución exige para expropiar, es inconstitucional; y se concluye pidiendo la declaración de inaplicabilidad de esa ley, por inconstitucional.

b) En la protección de derechos ante agresiones de una autoridad o de particulares, que se cometen mediante actos administrativos o materiales, de variada naturaleza, que se estiman ilegales o arbitrarios. Entonces se plantea que tal acto o hecho, ilegal o arbitrario, importa privación, perturbación o amenaza de determinado derecho del supuesto afectado, el cual acude al recurso de protección (art. 20 de la C. Pol.); y cuando observa que ese derecho no está directamente protegido por ese recurso, propone que, en todo caso, es dueño de ese derecho y, al agredírsele (en forma de privación, perturbación o amenaza), se le está agrediendo (en la misma forma) su derecho de propiedad, derecho que sí es uno de los que están protegidos por ese recurso (incluso, cuando el derecho supuestamente afectado está directamente protegido, suele sostenerse que el acto o hecho ha vulnerado aquel derecho y, además, el de propiedad sobre él).

Puede apreciarse que por esta vía ha sido enorme el fortalecimiento de los derechos individuales, de toda naturaleza. Concretamente, en materia de retroactividad, su protección, inicialmente establecida sólo por ley (art. 9º del CC.), ha sido por este camino elevada a rango constitucional. Como la norma que impide la retroactividad de las leyes es sólo una ley (el art. 9º del CC.), y podría, por tanto, dictarse una ley que, privando de un de-

recho, expresamente se dispusiere retroactiva (dejando inaplicable para esa materia el art. 9º citado), ahora, con este planteamiento, mediante la protección constitucional, se logra rechazar las leyes retroactivas cuando vulneren un derecho adquirido.

Por último, debe advertirse que en la aplicación práctica de la materia queda pendiente la precisión de algunos temas (difíciles de abordar en abstracto). Entre ellos:

a) La distinción entre privación y restricción de ejercicio, aplicada a un derecho; cuándo una ley, acto o hecho, priva de un derecho y cuándo sólo restringe su ejercicio. La respuesta es importante porque las normas constitucionales autorizan al legislador disponer la privación del dominio (o de sus atributos esenciales) sólo mediante ley expropiatoria (con varias exigencias), que no es necesaria para introducir restricciones a su ejercicio (para más examen v. infra, Nº 57 bis).

b) La calificación de derecho; qué elemento(s) distingue(n) a un derecho de meras expectativas, simples facultades, prerrogativas, situaciones, opciones, etc. La respuesta es importante porque son los derechos los calificados de cosas incorpóreas y, por tanto, sobre los que hay (una especie de) propiedad.

c) La determinación del ámbito protegido; si todos los (auténticos) derechos (patrimoniales y extrapatrimoniales) quedan incluidos en la calificación de “cosas incorpóreas”, o sólo alguna categoría, con la consecuencia de que sobre ellos hay (una especie de) propiedad y de que, por tanto, quedan amparados (a través de ella).

En las dos últimas precisiones la jurisprudencia, por una parte, ha debido pronunciarse sobre variadas proposiciones y, por otra, ha resultado, al menos para decidir recursos de protección, generosa hasta el extremo.

d) Aunque la Constitución ha concebido que hay, simplemente, propiedad sobre los bienes incorpóreas, para algunos particulares efectos y aun, en alguna

medida para la interpretación de la norma constitucional, cuál es el sentido de la expresión “especie de propiedad” empleada en el art. 583 del Código.

**15.** Con base en la formulada calificación del Código (bienes incorporales) se tratará a continuación de los conceptos de derechos real y personal. Las clasificaciones posteriores se establecen con referencia fundamental a los bienes corporales.

**16. Bienes incorporales.** Como se ha dicho, según el Código “son derechos reales o personales” (art. 576).

**17. A) Derechos reales.** El Código define el derecho real adoptando un concepto que es considerado el clásico (art. 577). Se concibe como una relación persona-cosa, inmediata, absoluta; un derecho en la cosa (*ius in re*). Puede entenderse como un “poder o señorío” que tiene un sujeto sobre una cosa. Cuando ese poder es completo, total, se está en presencia del derecho real máximo, el dominio; pero puede ser parcial, incompleto, lo que acontece en los demás derechos reales (usufructo, prenda, hipoteca). El titular es una persona, pero pueden también ser varias (como en la copropiedad). Y, debido a ese poderío directo, la cosa ha de ser siempre determinada. Si debe necesariamente ser corporal o podría ser incorporeal, nos lleva nuevamente al problema del concepto de cosa, ya referido, y que estará siempre presente en el estudio del Derecho de los bienes.

Pero esa concepción del derecho real como una relación persona-cosa ha sido intensamente discutida; se objeta que es impropio concebir una relación entre una persona y una cosa, en circunstancias que en Derecho las relaciones jurídicas se establecen entre sujetos, y es el objeto de esa relación el que podrá recaer sobre una cosa.

Por la disconformidad con aquella noción han surgido numerosas proposiciones para la concepción del derecho real (que –como es comprensible– tratan

en conjunto el derecho real y el personal; han sido resumidas en nuestro texto de Obligaciones, que luego será citado). Se hará referencia aquí sólo al planteamiento, bastante difundido, de la llamada “obligación pasivamente universal”. Se entiende que entre el derecho real y el derecho personal no existe una diferencia substancial. En último término, el derecho real también importa una relación entre sujetos, pero mientras en el derecho personal dicha relación se produce entre acreedor y deudor, recayendo sobre la prestación, en el derecho real esa relación tiene lugar entre el titular y el resto de las personas, recayendo, desde luego, sobre la cosa de que se trata; de este modo, el titular tiene el derecho de que se respete por todos el ejercicio de sus facultades sobre la cosa, y todos los demás, la obligación de ese respeto, absteniéndose de perturbarlo.

*Clasificación.* El contenido de los distintos derechos reales conduce a agruparlos en derechos reales de goce y de garantía.

*Los derechos reales de goce* permiten la utilización directa de la cosa (uso, percepción de frutos). El primero de ellos, el más completo, es el de dominio; junto a él están otros con facultades limitadas: usufructo, uso, servidumbre.

*Los derechos reales de garantía* permiten utilizar la cosa indirectamente, por su valor de cambio; contienen la facultad de lograr, con el auxilio de la justicia, su enajenación para obtener con el producto una prestación incumplida (prenda, hipoteca).

En otro sentido, el carácter integral del derecho de dominio conduce a considerarlo separadamente, formando categoría, ante los demás que, en conjunto, suelen denominarse “derechos reales en cosa ajena”.

*La reserva legal en la creación de derechos reales.* Por sus caracteres (como se verá luego) los derechos personales son infinitos; tantos cuanto los particulares acuerden, con las modalidades que les impriman sus convenios. Es antigua la discrepancia acer-

ca de la actitud que debe adoptarse respecto de los derechos reales: si la creación de derechos reales (tipos) debe quedar entregada a la voluntad de los particulares (*numerus apertus*) o debe quedar limitada por la ley, en términos de que sólo la ley puede establecer cuáles son los derechos reales admitidos (*numerus clausus*). En favor del número abierto se aduce, principalmente, la autonomía de la voluntad y la mejor posibilidad de adecuarse a las necesidades de los negocios. Para el número cerrado hay fundamentos de orden político-económico; el carácter de orden público que tienen las normas sobre la organización de la propiedad, en esta materia impide que se convengan variadas vinculaciones que enterrarían la circulación de los bienes, conduciendo a un trastorno del régimen económico (llevándolo a caracteres feudales); en este mismo sentido, y con componentes técnico y práctico, se observa que ostentando el derecho real una respetabilidad universal (*erga omnes*) para cumplir con ese respeto es indispensable que esté bien determinado, bien definido y conocido: su contenido, alcance y restricciones; difusos o desconocidos estos caracteres, no es procedente exigir aquel respeto; y una libertad de los particulares para su constitución conduce a una imposibilidad o, al menos, a una intensa dificultad en aquella definición y su conocimiento.

Los Códigos frecuentemente omiten un formal pronunciamiento sobre el dilema, circunstancia que favorece la discusión. Actualmente, en la doctrina y en las legislaciones (con interpretación doctrinaria donde los textos lo permiten) parece prevalecer la decisión del número cerrado.

Entre nosotros, con un anuncio no del todo definitorio (“Son derechos reales”), el art. 577 menciona un conjunto que no ha resultado taxativo. Desde luego, casi a continuación de aquel precepto el Código agrega uno más (art. 579). Deben considerarse también los denominados “derechos reales administrativos”, que consagran algunos textos legales

nacionales (como el derecho de aprovechamiento de aguas, el del concesionario; sus peculiaridades requieren un análisis especial, que trata la disciplina correspondiente). En cuanto al origen (sólo legal o también por los particulares) el Código no formula declaración; atendidos los textos y los fundamentos antes enunciados, predomina la conclusión de que sólo la ley puede crearlos; lo compartimos (la opinión discrepante postula que son admisibles ciertos derechos reales no contemplados en la ley, con el fundamento de que no hay norma que expresamente imponga reserva legal, y llegó con la proposición de admitir el derecho de *superficie*, conocido en doctrina y legislaciones extranjeras).

Aunque puede haber quedado claro, conviene precisar que la voluntad de los particulares es generalmente la que origina los derechos reales en concreto. Así, para que se configure un usufructo será necesario que un sujeto se lo conceda a otro en un convenio, en un testamento; incluso en casos como el usufructo legal del padre o del marido, hace falta que para que tengan lugar, junto al precepto legal que los establece se agreguen otros supuestos (que haya matrimonio, por ej.), en los que es decisiva la voluntad de los particulares. Pero el usufructo, como figura jurídica, está previamente diseñado en la ley; de modo que cuando se plantea el problema de si los particulares pueden crear derechos reales, lo que se discute es si ellos podrían elaborar, en sus pactos, un derecho real no contemplado en abstracto por los textos legales.

**18. B) Derechos personales.** También lo define el Código (art. 578). En otros términos, es el vínculo obligatorio en el extremo del acreedor; es la contrapartida de la obligación del deudor. Un acreedor, un deudor y una prestación (dar, hacer o no hacer) constituyen los elementos de la relación. El acreedor tiene el derecho a exigir al deudor la prestación y el deudor la obligación de efectuarla al acreedor (el tema tiene reservado un ca-

pítulo especial, el Derecho de obligaciones).

**19. Las acciones.** Luego de definir el derecho real y el derecho personal, el Código declara que de ellos nacen, respectivamente, las acciones reales y las acciones personales (arts. 577 y 578). En el Derecho adjetivo contemporáneo es muy discutido, y más bien negado, que la acción emane del derecho (en todo caso, el análisis jurídico de la acción es materia propia del Derecho procesal).

**20. Referencia a una clasificación.** Después de enunciar los conceptos anteriores, el Código aplica a los derechos y acciones la clasificación de los bienes corporales en muebles e inmuebles (art. 580); son muebles e inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse (derechos reales) o que se debe (derechos personales); y agrega que los hechos que se deben se reputan muebles (art. 581).

## 2) BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**21. Advertencia.** Según se ha dicho, esta clasificación es aplicable tanto a los bienes corporales como a los incorporales (arts. 566 y 580); como ya se ha tratado de éstos, lo que sigue está referido fundamentalmente a los corporales.

**22. Formulación.** “Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles” (art. 566).

Nacida en el Derecho romano, paulatinamente esta clasificación fue adquiriendo importancia, hasta transformarse en una de las fundamentales, si no en la más importante, de las clasificaciones de los bienes; la naturaleza y el rol económico distintos imponen diversidad de normas en muchas materias.

Por largo tiempo, y hasta la llegada del desarrollo industrial, los inmuebles (el suelo) constituían el bien económico por excelencia, representantes de poder y prestigio; desde entonces ha quedado estable-

cida para ellos una especial protección, recogida en la generalidad de las codificaciones. Sin embargo, el progreso de la industria ha originado la producción de muchos bienes muebles (instrumentos electrónicos, medios de transporte, objetos de propiedad intelectual, etc.), cuyo valor puede llegar a superar el de los inmuebles. Por otra parte, la producción en gran escala, que necesita de cuantiosos recursos económicos para sus instalaciones industriales, ha motivado el surgimiento de ciertas instituciones jurídicas, como las sociedades de capital, que a su vez ha derivado en una particular “movilización de los inmuebles”, al existir ciertos títulos (como las acciones), representativos del valor de una parte del haber social y que pueden transferirse fácilmente. Siempre los inmuebles por naturaleza se han traspasado de un sujeto a otro sólo en los títulos (y conviene recordarlo), pero con estas sociedades tales transferencias, y parciales, se multiplican notablemente.

Con lo expuesto puede concluirse: primero, que el apareamiento de muchos muebles de valor debe llevar, y ha llevado, al legislador a proteger algunos de ellos, dictándose al efecto normas especiales; entonces, la protección a los inmuebles, como uno de los fundamentos de la distinción, se debilita (pero mantiene su interés debido a que por su diversa naturaleza y utilidad estos bienes siguen recibiendo distinto tratamiento jurídico); y segundo que, como puede verse corrientemente, el desarrollo de las áreas urbanas y específicamente del comercio, ha ido también incrementando el valor de los inmuebles: por su utilidad mercantil, en sectores céntricos de las ciudades alcanzan valores excepcionales; y, concretados en una edificación habitacional, siguen ostentando una demanda bastante segura y en gran cantidad. En este sentido es fácil constatar que, en contrapartida del aumento de muebles valiosos, con el progreso económico general los inmuebles están recibiendo una constante mejoría material que incrementa su valor; en el medio urbano, en obras de urbanización